

Salto, 24 de Enero de 2017

VISTO: La necesidad de instrumentar un protocolo de actuación administrativa en relación a las actuaciones que realiza la Administración referidas al control y policía territorial con la finalidad de impedir las ocupaciones ilegales que se realizan en violación a la normativa existente y contrarias a lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial.-

RESULTANDO: I) Que los artículos 68 y 69 de la Ley 18.308 de fecha 12 de junio de 2008 y su modificativo artículo 489 de la Ley 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, establecen que los Gobiernos Departamentales deberán ejercer el control y la policía territorial, asignando a la Intendencia facultades de policía territorial específicas dirigidas a identificar todas aquellas acciones realizadas en el territorio en contravención a la normativa existente en general y en particular contraria a los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

II) Que a los efectos de dar garantías a todas las personas involucradas, particulares y funcionarios de la Administración, se considera necesario y de interés general aprobar y ejecutar un Protocolo de Actuación de Control y Policía territorial referido a las ocupaciones ilegales, cuya elaboración se efectuó con la participación de las Direcciones involucradas con competencia directa en la materia.-

ATENTO a lo expresado y conforme a los artículos 68 y 69 de la Ley 18.308; numeral 35 del artículo 19 y literal B del numeral 43 del artículo 35 de la Ley 9.515 en la redacción dada por el artículo 83 de la Ley 18.308 y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes, EL INTENDENTE DE SALTO,

RESUELVE:

1º.- Aprobar el siguiente Protocolo de Actuación de la Unidad de Contralor y Vigilancia en casos de constatación de ocupaciones ilegales, el que queda redactado en los siguientes términos:

1) El presente Protocolo de Actuación es de aplicación toda vez que por parte de los funcionarios asignados a la Unidad de Contralor y Vigilancia se constata una ocupación ilegal de predios de dominio público o fiscal o predios propiedad de particulares, violatoria del marco jurídico vigente.

2) Se entiende por ocupación ilegal cualquier tipo de asentamiento humano que se efectúe en violación a la normativa vigente en general y de los instrumentos de ordenamiento territorial en particular.

3) En caso de ser constatada dicha ocupación por funcionario municipal que no sea de los funcionarios asignados a la Unidad de Contralor y Vigilancia, deberá comunicarlo inmediatamente a dicha oficina para efectuar las acciones correspondientes.

4) Una vez constatada la ocupación por cualquier medio por parte del funcionario actuante, se efectuará un registro fotográfico de la misma, se labrará acta detallada y se pondrá en conocimiento de las actuaciones a los ocupantes.

Si correspondiere se comunicará directamente con el Ministerio del Interior o Prefectura, a efectos de requerir el apoyo de la fuerza pública para concurrir nuevamente al lugar.

5) En caso de que al momento de la constatación el funcionario actuante considere encontrarse en una situación de riesgo que amenace su integridad física o la de terceros, efectuará el correspondiente aviso al 911, para que la fuerza pública correspondiente otorgue las garantías necesarias para la efectivización de las actuaciones dispuestas.

6) El funcionario actuante, pasadas 24 horas, concurrirá en una segunda oportunidad, en la cual de mantenerse la ocupación, procederá a intimar la desocupación con plazo de 10 días hábiles, por cedulón firmado por el Director General de Obras, en ejercicio de atribuciones delegadas. En esta segunda oportunidad, concurrirá el funcionario actuante con el apoyo de la fuerza pública,

Previamente a la concurrencia de la fuerza pública, el funcionario actuante deberá haberse comunicado con la Prefectura o el Ministerio del Interior para solicitar el apoyo de la fuerza pública.

6) En caso de que al momento de la constatación el funcionario actuante considere encontrarse en una situación de riesgo que amenace su integridad física o la de terceros, efectuará el correspondiente aviso al 911, para que la fuerza pública correspondiente otorgue las garantías necesarias para la efectivización de las actuaciones dispuestas.

coordinado previamente con el referente a designarse por el Ministerio del Interior y/o Prefectura si correspondiere.

La intimación a la desocupación siempre se realizará bajo apercibimiento de demolición, sin perjuicio de intentar disuadir a los ocupantes de abandonar el inmueble; en todo caso, además de la intimación, se otorgará vista de las actuaciones por el mismo plazo.

Concurrirá, asimismo, acompañado por otro funcionario asignado a la tarea, que hará las veces de testigo de la situación concreta. Se labrará acta de la actuación.

7) Transcurrido el plazo de la intimación, se concurrirá nuevamente a constatar si se han retirado las construcciones y ocupantes; en esta oportunidad, en base a la situación particular se valorará si será necesario o no el apoyo de la fuerza pública.

8) Una vez constatada la desocupación del predio, se dejará registro fotográfico de ello por parte del funcionario actuante, labrándose acta que se elevará a la Unidad de Contralor y Vigilancia.

9) En caso contrario, de constatare que continúa la ocupación, se labrará acta y registro fotográfico y se comunicará a la Unidad de Contralor y Vigilancia, quien elevará al Intendente para que dicte resolución de demolición la cual será notificada por el funcionario actuante en el domicilio de los ocupantes por cedulón firmado por el /los ocupantes o, en su caso por cedulón con firma de otro funcionario como testigo. Se valorará en el caso la necesidad de apoyo de la fuerza pública.

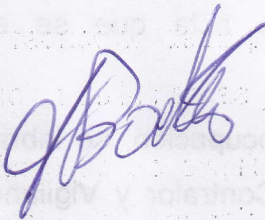
10) La Dirección General de Obras será la encargada de proceder al cumplimiento de la resolución, efectivizando la demolición con auxilio de la fuerza pública, siempre que se tratare de predios de dominio público. A los efectos de la constatación de la situación dominial del padrón de que se trate, Servicio de Escribanía proporcionará informe con la información registral correspondiente, sin perjuicio de la línea de base territorial a confeccionarse cuyo soporte será el Sistema de Información Geográfica (S.I.G.).

11) En caso de que las ocupaciones se detecten en padrones propiedad de particulares o de dominio privado municipal (fiscal), se comunicará al Juez de Paz para que determine el domicilio de los ocupantes por cedulón, el cual será notificado a los ocupantes, en su caso por cedulón que firmen los ocupantes, o en su caso por cedulón con firma de otro funcionario como testigo. Se valorará en el caso la necesidad de apoyo de la fuerza pública.

competente de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 69 de la Ley 18.308, en la redacción dada por el artículo 489 de la Ley 19.355, solicitando la inmediata detención de las obras y la autorización para demoler.

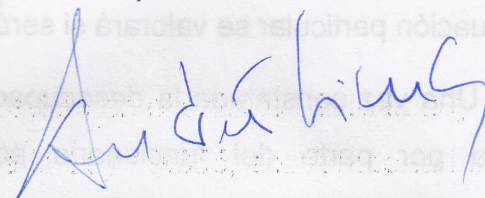
12) En caso de existir recursos administrativos presentados contra la resolución administrativa, los mismos tendrán efecto suspensivo, salvo que por resolución debidamente fundada se disponga la prosecución de las actuaciones, en virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 71 de la Ley 18.308.

2º.- Insértese en el Libro de Resoluciones; tomen nota la Dirección General de Obras, División Ordenamiento Territorial, División Oficina Técnica (Agrimensura), Departamento de Desarrollo Social, División Jurídica y Servicio de Escribanía, y Unidad de Contralor y Vigilancia, a sus efectos. Cumplido Archívese.



LIC. FABIÁN BOCHIA RASTELLINO

SECRETARIO GENERAL



DR. ANDRÉS LIMA PROSERPIO

INTENDENTE